



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO: EL CASO COLOMBIANO

Claudia Tatiana Salas Torres¹

Universidad Católica de Colombia

Resumen

La violencia sexual es uno de los delitos que se presenta en el contexto de conflictos armados y que es perpetrado principalmente contra las mujeres. La sumisión de las víctimas ocurre en el marco de relaciones asimétricas de poder frente a sus victimarios, quienes utilizan el miedo y la fuerza para reforzar la percepción de debilidad e inferioridad atribuida a las víctimas, y en particular al género femenino. Es por ello que diferentes organismos de nivel internacional y nacional han promovido instrumentos normativos para la prevención, protección y reparación de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia sexual. En esta perspectiva, el Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP explícitamente busca asegurar que los mecanismos que contempla en esta materia se rijan por los lineamientos internacionales. Este artículo analiza la congruencia de estos mecanismos respecto de la protección de los derechos vulnerados, la garantía de reparación y no repetición y su satisfacción, en relación con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano, así como con lo establecido en las sentencias sobre la materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Palabras Clave: Reparación integral, violencia sexual, Acuerdo de Paz, conflicto armado colombiano, derechos de la mujer, Colombia.

¹ Artículo resultado de investigación elaborado para optar por el Título de Abogado en la Universidad Católica de Colombia por parte de Estudiante del programa de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo institucional: ctsalas95@ucatolica.edu.co. Este artículo fue dirigido por el doctor Bernardo Pérez Salazar, docente investigador de la Universidad Católica de Colombia.

COMPREHENSIVE REPARATION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE OCCASION OF ARMED CONFLICT: THE COLOMBIAN CASE

Abstract

Sexual violence is a crime that occurs in the context of the armed conflicts and is perpetrated mainly against women. The submission of victims occurs in the framework of asymmetric power relations vis-à-vis their victimizers, who use fear and force to amplify the perception of weakness and inferiority attributed to victims, and particularly, to females. That is why different international and national bodies have promoted normative instruments for the prevention, protection and reparation of the rights of victims of sexual violence. In this perspective, the peace agreement signed by Colombia's National Government and the FARC-EP explicitly seeks to ensure that the mechanisms contemplated concerning this matter are governed by international guidelines. This article analyzes the consistency of these mechanisms with respect to the protection of the violated rights, the guarantee of reparation and non-repetition and their satisfaction, in relation to the international obligations acquired by the Colombian State, as well as with what is established in sentences on the matter ruled by the Inter-American Court of Rights Humans.

Key Words: Comprehensive reparation, sexual violence, Peace Agreement, Colombian armed conflict, woman rights, Colombia.

Sumario

Introducción. 1. Alcances de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. 2. Mecanismos de reparación integral para las víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado: Derecho internacional y nacional. 3. Idoneidad y congruencia de los mecanismos de reparación integral sobre la violencia sexual dentro del conflicto armado: Acuerdo Final. Conclusiones. Referencias Bibliográficas

Introducción

La violencia contra las mujeres es una de las formas de discriminación contra ellas. La eliminación de esta forma particular de discriminación es un derecho humano fundamental cuya defensa, protección y garantía muchas veces no se considera prioritario.

Para empezar, hay que reconocer que la discriminación contra las mujeres: “hace referencia a las violaciones sufridas específicamente por el sexo, es decir, sufridas mayoritariamente por mujeres o que están basadas en el sexo.” (Miguel, 2014, p. 57) Dichas violaciones pueden referirse a una variedad de conductas dirigidas a la afectación de la mujer, bien sea en el plano físico o moral. Cada uno de los daños ocasionados perjudica distintas esferas de la persona y la vida de la mujer agredida.

De allí el imperativo de garantizar la protección de los derechos de la mujer en la sociedad, puesto que su vulneración constituye una amenaza existencial contra ellas y contra lo que representan socialmente. Para ello, es necesario reconocer a las mujeres como “grupo vulnerable”, y como víctimas cuando sea necesario. (Álvarez Molinero, 2007, p. 79) A su vez, es preciso garantizar la igualdad de derechos y oportunidades al alcance de las mujeres con respecto de los hombres, y rechazar los factores de discriminación y roles opresivos con los que se fomenta la idea de inferioridad y subordinación de las mujeres. (Facchi, 2005, p. 28)

Dada la persistencia de discriminación social en contra de las mujeres, cada ordenamiento jurídico debe prever mecanismos para garantizar su protección. Sin embargo, dada la diversidad de formas de discriminación en su contra, entre ellas la violencia, hay que recalcar la necesidad de contemplar enfoques y estrategias diferenciadas, aplicables según la situación y contexto, de modo que se garantice la salvaguarda de los derechos y la solución a las situaciones que atentan en su contra. (Sciortino, 2009)

En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano ha realizado numerosas reformas en materia constitucional, civil y penal, en este sentido. Entre las reformas principales, se destacan aquellas referidas a la posición de la mujer respecto del hombre y cómo eliminar progresivamente la desproporcionalidad en relación con el ejercicio efectivo de los derechos

de las mujeres en nuestra sociedad. Sandra Milena Daza Coronado (2016) lo expone de la siguiente manera:

La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado, a partir de la proyección constitucional de una instancia especial de protección de la mujer, la teoría de la acción positiva o afirmativa, que, en esencia, reconoce la necesidad de trascender el ámbito de establecimiento del estatus igualitario entre hombre y mujer, para generar una ruptura de esta. Es esta una ruptura positiva en la medida en que está encaminada a generar un resarcimiento o una restitución de los derechos de que han sido tradicionalmente despojadas las mujeres, a partir de prácticas de discriminación social que las han subvalorado y relegado hasta propiciar una situación clara de desventaja no solo en el ámbito familiar, sino en el amplio espectro social. (p. 84-85)

Reconociendo este contexto general de discriminación social contra las mujeres, el presente artículo se centra en una forma particularmente insidiosa de discriminación contra las mujeres con ocasión del conflicto armado interno en Colombia: la violencia sexual. Para ello, se acoge el concepto correspondiente propuesto por el Grupo de Memoria Histórica (en adelante GMH) como “una práctica que descentra a la víctima, la despoja de su autonomía, de su ser, la deshumaniza a la par que ratifica el poder soberano del grupo armado”. (GMH, 2017, p. 83)

En una primera sección se caracterizará la violencia sexual en el contexto del conflicto armado al igual que sus alcances. En seguida se estudiarán los instrumentos normativos que son aplicables para su prevención al igual que para la protección y reparación de los derechos de las víctimas de este delito en ese ámbito. Un objetivo inicial será identificar cuáles de las medidas y mecanismos contemplados en estos instrumentos quedaron consignados en Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final) pactado entre Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

De esta manera se pretende dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿En qué medida son congruentes los mecanismos de reparación integral del Acuerdo de Paz y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado? Así, en el desarrollo de este trabajo se

analizará cómo se prevé establecer las necesidades de las víctimas de este delito con ocasión del conflicto armado y cuál ha sido la participación del Estado de cara a cumplir con sus responsabilidades internacionales en esta materia, en términos de protección y reparación de derechos vulnerados y de garantía de no repetición. (Bohórquez Suárez, 2018)

1. Alcances de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado

El desarrollo de un conflicto armado interno trae consigo números aspectos para analizar. Un claro ejemplo de ello es el caso de Colombia, cuyo conflicto armado interno ha sido tan extenso (prolongándose por más de 50 años) y degradado por la cantidad de crímenes cometidos a lo largo del territorio nacional. (GMH, 2013) Además, el análisis de este conflicto armado interno confirma que las acciones y daños realizados con ocasión del mismo afectan de manera diferenciada a distintos grupos de la población, entre ellos, a las mujeres.

Las acciones emprendidas por los grupos armados organizados al margen de la ley, bajo la justificación de luchar por sus ideales y conseguir sus propósitos, traen como consecuencia el quebrantamiento del desarrollo normal de la vida cotidiana de población civil. Por consiguiente, niñas, niños, y jóvenes quedan expuestos al reclutamiento voluntario o forzoso. El temor y la violencia indiscriminados que protagonizan estos menores al servicio de estos grupos armados, con frecuencia conduce a que sus acciones sean calificadas como ‘terroristas’. No obstante, de cualquier modo, no pierden su condición de víctimas al haber sido menores objeto de reclutamiento ilícito. (Peña, 2006; Vargas Rincón, 2008; Valencia & Daza, 2010)

Son diversas las estrategias utilizadas por los grupos armados para ejercer presión sobre las personas y los grupos sociales en contextos de conflictos armados. La intimidación, el temor y la violencia tienen efectos psicológicos sobre sus destinatarios. Los grupos armados instrumentalizan el miedo como “un poder que tratan de utilizar para imponer sus ideas o someter a los discrepantes”. (Castillo Moro, 2017, p. 78) De allí surge la intimidación y el temor con el cual se establece el control social, sin necesidad de recurrir de manera directa y permanente al uso la violencia. La situación resultante de sometimiento, a su vez, refuerza la auto-percepción de los grupos armados sobre su poder y la convicción que pueden actuar como les plazca, con la aquiescencia temerosa de sus víctimas potenciales.

Durante el conflicto armado colombiano fueron varias las regiones que vivieron escenarios de este tipo, especialmente en ámbitos rurales donde la densidad de la presencia de los grupos armados resultaba muy superior a la de las demás instituciones a cargo de la defensa y protección de los derechos². Es allí donde se acrecientan las asimetrías de poder entre victimario y víctima y, por consiguiente, donde resulta más simple coaccionar. Dichas asimetrías resultan más notorias en temas de género, pues los agentes armados aprovechan las condiciones previamente existentes, entre ellas, su indefensión y desigualdad en conocimientos, derechos y responsabilidades. (Scott, 1996 en Castrillón Pulido, 2015, p. 79; Ramírez Huertas, 2017, p. 137-138)

En general, la violencia en contra de la mujer ha sido tratada durante los últimos decenios a través de diversos instrumentos internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW, por sus siglas en inglés). Al respecto, su artículo 1° define la discriminación de la mujer³ refiriendo aquellos escenarios que: “infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”. (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1992)

La discriminación contra la mujer cobra un significado especial en el contexto de los conflictos armados. Su mayor vulnerabilidad se magnifica por la percepción estereotipada de su *debilidad* (Gallegos Argüello, 2012, p. 706), particularmente frente a la superioridad de la capacidad coactiva de los agentes armados en el contexto de los conflictos armados. Es así como, en el desarrollo de hostigamientos y combates resultan víctimas de delitos cometidos por los grupos armados como el desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, secuestro, y diversas formas de violencia sexual, entre otros.

² Los departamentos más afectados son: Antioquia, Santander y Norte de Santander así como Meta, Caquetá, Córdoba, Cauca y Arauca, entre otros; según el artículo: Eltiempo.com (2018, 29 de octubre). Los diez departamentos más golpeados por el conflicto en 60 años. *El Tiempo*. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cuales-son-los-departamentos-mas-afectados-por-el-conflicto-armado-en-colombia-286030>

³ Art. 1°. “(...) denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” (La CEDAW ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981).

“La violencia que más ha afectado a miles de mujeres en el conflicto armado, ha sido la violencia sexual”. (Barros & Rojas Mateus, 2015, p. 6) Este tipo de violencia tiene gran impacto en contextos con presencia de grupos armados activos, en los cuales se incrementa la frecuencia con la cual la mujer se reduce a un objeto sin derechos, un botín de guerra del que se puede disponer como quiera y que a los ojos del victimario representa un símbolo de su poder sin límites. Alrededor de la violencia sexual se encuentran muchas prácticas que afectan nocivamente a la mujer, entre ella “la tortura y mutilación, la violación en presencia de miembros de la familia y la violación en grupo”. (ABColombia, Sisma Mujer, 2013, en Barros & Rojas Mateus, 2015, p. 6)

Al respecto, el Magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP), Mauricio García Cadena, resalta lo afirmado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 07 de diciembre de 2016, así:

De allí que la VS (violencia sexual) en el desarrollo de los conflictos, incluido Colombia, debe analizarse en sus justas proporciones y entenderse como mecanismo útil para atemorizar y desplazar a una población, generar un esquema control (sic)social sobre un territorio, amenazar y silenciar otras conductas delictivas cometidas por los grupos armados, extraer información sobre los enemigos, castigar conductas censurables, entre muchas otras razones que están asociadas a las dinámicas de la guerra y a la militarización de las relaciones interpersonales. (García Cadena, 2018, p. 11)⁴

Lo que resta de este artículo se centra en la violencia sexual como forma lasciva de discriminación contra la mujer en el ámbito de los conflictos armados, que representa una de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario más significativas que afectan a este grupo poblacional. Particularmente, se analiza el tratamiento de las víctimas de este tipo de hechos y para la protección de sus derechos vulnerados en el marco del Acuerdo Final para la Paz suscrito por el gobierno nacional y las FARC-EP, con

⁴ Véase más en: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala de Justicia y Paz. (07 de diciembre de 2016). Sentencia en contra de Atanael Matajudios Buitrago y otros. Radicación: 110016000253201400103. [M.P. Uldi Teresa Jiménez López]. Recuperado de: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2017/02/2016-12-07-Atanael-Matajudios-Buitrago.pdf>

la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). (Congreso de Colombia, 2017)

Ahora bien, alrededor del Acuerdo de Paz y el reconocimiento de las víctimas, debe precisarse que sólo las conductas de violencia sexual cometidas en razón del conflicto armado interno en Colombia serán conocidas por la JEP⁵, mientras los casos que no lo sean serán juzgados por la justicia ordinaria. Debido a esta condición, cada caso particular debe ser considerados para determinar si efectivamente existe una conexión entre la conducta y el conflicto armado interno. Para ello, la Comisión de Género de la JEP ha propuesto el siguiente criterio. Para establecer una conexión, las dinámicas del conflicto armado interno deben “jugar un rol sustancial en la habilidad del perpetrador para cometer el crimen, su decisión de cometerlo, la manera en la que se cometió, o el propósito por el cual se cometió”. (JEP, Salas de Justicia, Sala de Amnistía e Indulto, 2019, p. 40)

De lo anterior se podría pensar que resulta sencillo relacionar las conductas de violencia sexual con alguno de estos factores dinámicos del conflicto armado interno. Sin embargo, no se debe soslayar que la mayoría de las veces la perpetración de esta clase de delitos en contra de la mujer ocurre en el marco general de las relaciones de poder asimétricas, que culturalmente gobiernan la interacción entre hombre y mujer en una sociedad como la colombiana. Por consiguiente, el establecimiento de la conexión de un caso de violencia sexual con las dinámicas propias del conflicto armado resulta particularmente oneroso para la víctima, si no tiene a su alcance evidencia que demuestre de manera inequívoca que la finalidad del perpetrador en la comisión de la conducta de violencia sexual respondía a una dinámica inscrita dentro del conflicto armado interno.

Como los señala el magistrado García Cadena (2018) “el contexto de confrontación armada puede facilitar, promover y aumentar patrones de violencia en contextos sociales determinados”. (p. 6).

Al respecto, en términos generales la Sala de Amnistía o Indulto identifica tres clases de finalidades para el uso de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano. En

⁵ El artículo 5° del Acto Legislativo 01 de 2017, contempla que esta jurisdicción: “conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 01 de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, (...)”

primer lugar, se habla de una violencia utilizada con finalidad *estratégica*, que la Comisión de Género de la JEP (2019) define como: “el que más claramente acoge criterios de conexión en el conflicto armado, en cuanto responde a una estructura del grupo armado y su política, explícita o implícita, que incluye órdenes de ejercer violencia” (p.40). Entre los fines concretos que se persiguen con la violencia enmarcada en esta finalidad se encuentran, entre otros: “dominar, regular, callar, obtener información, castigar, expropiar, exterminar, recompensar y cohesionar” (p. 42)

En segundo lugar, se encuentra la violencia utilizada con finalidad *práctica*, que se caracteriza porque no obedece a una política, plan u orden pero que es tolerada por los mandos por considerarse como “práctica”, puesto que el perpetrador la comete con la finalidad de amoldarse al comportamiento de grupo. (Wood, 2016, p. 34) Por último se encuentra la violencia que se perpetra con finalidad meramente *oportunista*, caracterizada por no responder a ninguna necesidad distinta a la de sacar provecho de una situación que lo permite. Generalmente la violencia ejercida con esta finalidad permite al victimario aprovechar la situación de indefensión de la víctima debido a la ventaja que adquiere al portar armamento, con la única finalidad de satisfacer su deseo sexual y la obtención de placer. (GMH, 2011, pp. 219-220)

En síntesis, con lo expuesto hasta aquí se hace evidente que el alcance de la violencia sexual contra la mujer en el contexto del conflicto armado plantea diversas dificultades prácticas tanto para el reconocimiento de las víctimas (lo que requiere identificar los elementos que tipifican este tipo de violencia y su relación con el escenario en que se presentaron los hechos), como para procurar remedio a este delito por medio de la acción coordinada de mecanismos de protección y reparación de las víctimas sobrevivientes que llevan en sus vidas y cargan sobre su cuerpo el peso de la guerra. (Barrios & Rojas Mateus, 2015, p. 14)

2. Mecanismos de reparación integral para las víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado: Derecho internacional y nacional

Ante la violencia sexual como una forma insidiosa de discriminación de las mujeres y de violación de sus derechos, los Estados han adquirido voluntariamente obligaciones de carácter internacional para la protección y defensa de los derechos de las mujeres por medio

de distintos tratados y convenios internacionales. Por consiguiente, a partir de su ratificación los Estados nacionales tiene obligaciones por las cuales deben efectivamente responder ante organismos internacionales, por medio del establecimiento y puesta en marcha de mecanismos eficaces para garantizar la protección y reparación de los derechos infringidos de las víctimas y la garantía de no repetición.

En el caso de Colombia, cronológicamente hay que hacer referencia a los Convenios de Ginebra (1949)⁶, encargados de regular lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH). El artículo 3° común, extiende su aplicación a los conflictos armados no internacionales.⁷

El IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, establece las infracciones consideradas como graves en su artículo 147 de la siguiente manera:

(...) son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes, si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, (...) (Convenio de Ginebra, 1949, art. 147).

Sí bien los la violencia sexual no se refiere aquí de manera explícita, está conducta se inscribe claramente dentro de aquellas que atentan gravemente contra la integridad física o la salud de la mujeres víctimas de dicha conducta delictiva. Posteriormente, el II Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra (1977)⁸ incluye dentro de sus garantías fundamentales la prohibición de “[...] los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”. (CICR, art. 4, lit. e)

Los convenios de Ginebra también establecen obligaciones para los Estados Parte en el sentido de implantar medidas dentro de sus ordenamientos jurídicos que determinen

⁶ Ratificados por Colombia mediante la Ley 5 de 1960.

⁷ Esta misma disposición se recoge luego en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. (1998, art. 8 núm. 2 lit. d, e y f), el cual fue ratificado por Colombia mediante la Ley 742 de 2002.

⁸ Ratificado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994.

sanciones penales aplicables a quienes cometan cualquiera de las infracciones consideradas como graves (CICR, 1949, art. 146), con lo cual queda demostrada la intención de abarcar los delitos sexuales dentro de la esfera del DIH.

Continuando con las responsabilidades internacionales del Estado en relación con la protección de derechos de las víctimas de violencia sexual, la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Pacto de San José de Costa Rica” (1969)⁹ establece compromisos adicionales en relación con los derechos y libertades, entre ellos, “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, (...)”. (art. 1, p. 7)

Si bien la Convención Americana tampoco cuenta con un artículo destinado a la protección de los derechos sexuales, y pese a que el tratamiento de este tipo de conductas debe ser especial, se deduce que su protección se encuentra inmersa en la del derecho a la integridad personal (art. 5), que incluye integridad física, psíquica y moral

En 1981, con la ratificación de la ya referida CEDAW¹⁰, la situación de la mujer dentro de la sociedad se hace más visible al igual que la necesidad de proteger sus derechos de manera explícita frente a su discriminación. Lo anterior marca un cambio a escala internacional en los patrones socioculturales de conducta, con el objetivo de eliminar los prejuicios a partir de relaciones de poder entre los sexos y percepciones de superioridad e inferioridad desde los estereotipos. (ONU, 1979, art. 5)

En adelante, los Estados Parte tienen la obligación de adoptar dentro de sus ordenamientos jurídicos las medidas que sean necesarias para combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres, así como la supresión de la “trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. (ONU, 1979, art. 6) Entre los avances significativos en su redacción frente a los instrumentos que le precedieron, se destaca el compromiso consignado en el quinto principio de la CEDAW de los Estados para formular e implementar reparaciones adecuadas con el fin de combatir las consecuencias de violaciones masivas de derechos

⁹ Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

¹⁰ Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.

humanos y del DIH, entre ellas, aquellas que han afectado a la población “víctima de violencia sexual”. (Jara Bustos, 2013, en Vivas Barrera, 2015, p. 16-17)

En la secuencia de instrumentos internacionales continua la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (1995)¹¹, la cual también contempla de manera explícita la violencia sexual entre las formas de violencia contra la mujer. (OEA, 1995, art. 2) Sin embargo, no se ocupa de la responsabilidad de los Estados Parte frente a las violaciones e infracciones por estas conductas en los escenarios de conflicto armado interno, que en el hemisferio del continente americano han demostrado ser recalcitrantes, aún después de la ratificación de este convenio.¹²

A pesar de esta limitación, la Convención establece en su artículo 8°, lit. f, en conexión con las medidas de protección y reparación, la obligación de los Estados Partes: “Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social”. (OEA, 1995, art. 8 lit. f) Adicionalmente, el artículo 7° del capítulo III, que determina los “Deberes de los Estados”, ordena la adopción de los medios necesarios para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia.¹³

¹¹ Ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995.

¹² Entre los conflictos armados internos que ya se encontraban en curso cuando se ratificó el Convenio de Belém do Pará y continuaron activos hasta más de una década después se pueden mencionar los de Colombia (insurgencia FARC- EP y ELN); Perú (insurgencia Sendero Luminoso); y Haití (insurgencia FLRN), entre otros.

¹³ Art. 7°. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
- b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
- c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
- d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
- e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
- f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

Al respecto, cabe resaltar aspectos como la inclusión y modificación de la legislación interna de modo que cuente con normas civiles, penales, administrativas y de otra naturaleza, por ejemplo disciplinarias, cuando la comisión se le atribuya a un agente o institución del Estado, ello con el objetivo de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer cuando esta sea considerada aceptada. A su vez ordena la adopción de procedimientos legales y mecanismos judiciales y administrativos para garantizar un resarcimiento efectivo, de tal manera que se garanticen medidas en contra del agresor procurando la no repetición de su conducta. (OEA, 1995, art. 7)

Sobre todo hay que destacar el esfuerzo sobre la protección de la mujer víctima de cualquier clase de violencia, puesto que se fomenta la defensa de su integridad, así como el acceso a mecanismos de justicia y medidas de protección que garanticen un resarcimiento y reparación del daño y las medidas de compensación pertinentes, para que el tratamiento de este tipo de casos velen por la reparación de las víctimas. (OEA, 1995, art. 7)

En breve, si bien los instrumentos anteriores representan avances significativos al promover las intervención y protección del Estado en caso de violaciones e infracciones a los derechos humanos como la violencia sexual contra las mujeres, omiten el desarrollo explícito de las disposiciones establecidas desde las Convenciones de Ginebra de 1949 para el tratamiento de la violencia sexual en contra de las mujeres en el marco de los conflictos armados internos que en el presente aún no cesan en el continente americano.

Aun así, en desarrollo de estas obligaciones internacionales, la Corte Constitucional Colombiana en sentencia T-458 de 2010. [M. P. Luis Ernesto Vargas Silva], establece en relación con el derecho a reparación de la población desplazada:

El derecho a obtener reparación es de carácter integral. Esto significa que su alcance excede la visión meramente económica de la participación de las víctimas dentro de los procesos llevados contra los responsables del daño, y debe abarcar todos

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario. (Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2010)

Desde entonces, en el ordenamiento jurídico colombiano, la reparación integral de las violaciones e infracciones de derechos con ocasión del conflicto armado interno, entre ellas el desplazamiento forzado y la violencia sexual, implica el reconocimiento y garantía de derechos de las víctimas como la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. (Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo-ILSA, 2012, p. 52)

Así, la Ley 1448 de 2011 estableció el derecho a la reparación integral (art. 25) resaltando que esta debe ser: “adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido”. También se encarga de exponer quienes serán reconocidos como víctimas resaltando la situación de vulneración de Derechos Humanos en el marco del conflicto armado interno¹⁴. Lo anterior dando cumplimiento del objeto que persigue la citada ley dentro de un marco de justicia transicional, de manera que sea posible hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. (Congreso de Colombia, 2011, art. 1)

Dentro de las medidas previstas por esta ley para la reparación de víctimas se contemplan: “las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica”. (art. 25) Dichas medidas y su implementación dependerá de cada caso, partiendo de factores como la *vulneración de sus derechos* y las *características del hecho victimizante*.

En efecto, la jurisprudencia internacional también ha expresado la obligación de garantizar los derechos humanos cuando estos sean vulnerados en crímenes de guerra, de modo que es necesaria la existencia de un orden normativo que asegure de manera eficaz el libre y pleno ejercicio de los derechos a partir de la investigación de la comisión de los delitos. Así lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, primero en una sentencia condenando al Estado colombiano en 2006 por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un grupo de personas de Pueblo Bello por parte de un

¹⁴ Art 3°. Víctimas. Se consideran víctimas para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

grupo paramilitar, así como a la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos, (CorteIDH, 2006, p. 107)¹⁵ y luego en 2010, en sentencia condenatoria del Estado mexicano por su responsabilidad internacional por la violación sexual y tortura en perjuicio de la señora Rosendo Cantú, así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de esos hechos. (CorteIDH, 2010, pp. 31-32)¹⁶

Como lo señala la Corte IDH, cada una de esas acciones debe ser asumida por el Estado como: “un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.” (CorteIDH, 2006, p. 108)

Por consiguiente, a la luz de los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del DIH a interponer recursos y obtener reparaciones* de las Naciones Unidas, el Estado colombiano debe asegurar que los mecanismos de protección de derechos y reparación integral de las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado interno contemplados en el Acuerdo Final de Paz¹⁷ resulten compatibles con sus obligaciones jurídicas internacionales, tal como lo establecen los tratados y convenios internacionales que ha ratificado. (ONU, 2005, núm. 2)

El Acuerdo Final (2016) adopta en su preámbulo el reconocimiento de los derechos consagrados por los tratados internacionales sobre derechos humanos y que fueron ratificados por Colombia (p. 2). También consagra el derecho a la reparación directa dentro del proceso de justicia transicional contemplado dentro del mismo acuerdo (JEP) para hacer valer los derechos de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad, la justicia y la reparación (Ibídem). Resta entonces analizar cuáles son los mecanismos planteados por el

¹⁵ El caso conocido como *Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*.

¹⁶ El caso conocido como *Rosendo Cantú Vs. México*.

¹⁷ Tras las conversaciones que tuvieron lugar en La Habana a partir del segundo semestre de 2012 entre voceros de las FARC-EP y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, el 24 de agosto del 2016 se verifica la suscripción el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Su ratificación no fue aprobada por el plebiscito del 02 de octubre del mismo año, lo cual dio lugar a otro periodo de negociaciones y ajustes. La versión definitiva del Acuerdo Final de Paz fue publicada el 12 de noviembre, firmada el 24 de noviembre, y su refrendación fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso los días 29 y 30 de ese mes de 2016. (Loyo Cabezudo, 2017, p. 33-34)

Acuerdo y la JEP para que asegurar la protección de los derechos de las víctimas, al igual que su reparación integral, y verificar si estos son acordes con las obligaciones internacionales del Estado. (ONU, 2006 en Burbano Fernández de Castro & García Otero, 2016)

Para ello, inicialmente conviene examinar el quinto punto del Acuerdo Final (2016) que trata sobre los mecanismos de reparación de las víctimas del conflicto armado bajo la denominación de *Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición* (en adelante SIVJRNR), *Incluyendo a la JEP; y Compromiso sobre Derechos Humanos*. (p. 124)

Dentro de este punto se pretende garantizar el cese de las violaciones e infracciones de derechos y asegurar la satisfacción de la reparación de las víctimas (p. 127) Para ello se plantea el uso de mecanismos judiciales (la JEP) y extrajudiciales (la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición), que contribuyen a la investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos y del DIH, así como tanto para el esclarecimiento de la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos como sobre la reparación del daño ocasionado a cada persona o colectivos de un territorio determinado (p. 125-127)

El Acuerdo establece que la JEP como mecanismo judicial dará prelación a las necesidades de las víctimas que sean mujeres puesto que sufren:

(...) de manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas con ocasión del conflicto... [y por consiguiente] ...se debe adoptar un enfoque de género, reconociendo las medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres, y la importancia de su participación activa y equitativa en el componente de justicia del SIVJRNR. (p. 144).

Al respecto, según el Grupo de Monitoreo para la Implementación de la CEDAW en Colombia (2019), el Acuerdo Final para la Paz “previó una serie de medidas en relación con el enfoque de género y planteó adecuaciones institucionales y normativas cuya mayor o menor implementación ha impactado de diversas maneras a las mujeres en el país” (p. 8). Para el caso del tratamiento de las mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano, el Acuerdo Final (2016) prevé su acceso a las medidas de reparación

integral consideradas en el mismo, entre las cuales se incluyen “los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición”. (p. 129-130)

Cada uno de estos aspectos busca garantizar el citado derecho a la reparación integral. En la siguiente sección se aborda un análisis preliminar sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Acuerdo en orden a la reparación y no repetición de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

3. Idoneidad y congruencia de los mecanismos de reparación integral sobre la violencia sexual dentro del conflicto armado: Acuerdo Final

Los mecanismos de reparación contemplados en el Acuerdo Final se fundamentan en la *Declaración de principios*¹⁸ del 07 de junio de 2014 suscrita por el Gobierno Nacional y la FARC-EP. Con esa declaración ambas partes se comprometieron a garantizar la reparación integral para las víctimas del conflicto armado; en consecuencia, las instancias y mecanismos creados para la efectiva implementación del SIVJNR están diseñados de conformidad con ese principio.

Para garantizar la verdad se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la cual pretende contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con el fin de establecer responsabilidades históricas (no judiciales), así como al reconocimiento de las víctimas y la promoción de una convivencia que se dirija a la resolución de conflictos con miras a contribuir a la paz. (Acuerdo Final, 2016, p. 130)

En la búsqueda de la verdad para la reparación, particularmente en lo que se refiere a la violencia sexual en el marco del conflicto, se estableció la mayor importancia al análisis cuidadoso de sus efectos. Al respecto, el Acuerdo (2016) establece que aportar verdad implica relatar los hechos “de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión” (p. 146), lo cual podría conducir una victimización secundaria entendida como: “la mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez entra en

¹⁸ Los principios son: El reconocimiento de las víctimas; el reconocimiento de responsabilidad; satisfacción de los derechos de las víctimas; la participación de las víctimas; el esclarecimiento de la verdad; la reparación de las víctimas; las garantías de protección y seguridad; la garantía de no repetición; principio de reconciliación y enfoque de derechos. (Acuerdo Final, 2016, p. 124-125)

contacto con el sistema de justicia”. (Beristain, 1994, citado por Gutiérrez de Piñeres Botero, Coronel & Andrés Pérez, 2009, p. 50)

Del mismo modo, la victimización secundaria también puede ser considerada como:

(...) una reacción social negativa generada como consecuencia de la victimización primaria, donde la víctima reexperimenta una nueva violación a sus derechos legítimos, cuando la policía, las instituciones sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la situación de la víctima, a nivel económico, social, físico y psicológico. (Montada, 1991 & Albarrán, 2003, en Gutiérrez de Piñeres Botero et al., 2009, p. 50)

Como se aprecia en relación con este asunto, los efectos de la reparación integral pueden conducir a situaciones alejadas de lo que se pretende con la reparación, toda vez que con “la verdad” se podría fomentar el señalamiento y degradación de las mujeres víctimas en sus propios escenarios de vida social, reeditando la violación de sus derechos por medio de la discriminación, yendo en contravía con los principios de garantías de protección y seguridad y satisfacción de los derechos.

Para evitar que ello suceda, la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019, art. 16) prevé la aplicación del tratamiento diferenciado en los casos que involucren tipos de violencia sexual, garantizando el reconocimiento de derechos como el deber de debida diligencia y aquellos de carácter procesal que predicen abstener la práctica de pruebas que puedan implicar una intromisión innecesaria de su derecho a la intimidad. De esta manera, se procura que impedir que los procesos judiciales se conviertan en situaciones de revictimización, perjudicando la satisfacción de las necesidades que surgen en las víctimas del abuso sexual.

Respecto del componente de justicia contemplado en el SIVJRNR, el Acuerdo (2016, p. 143-145) establece la JEP como el mecanismo preferente para ejercer funciones judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos y del DIH, así como la instancia responsable de satisfacer el derecho a la justicia y resarcimiento de las víctimas del conflicto.

De conformidad con los tratados y convenios internacionales, en el marco de la JEP los delitos de acceso carnal violento y otras clases de violencia sexual no son amnistiables ni

indultables (Congreso de Colombia, 2019, art. 42). Es decir, la responsabilidad de los perpetradores de estas conductas punibles deriva en la imposición de sanciones penales.

En ese sentido, la Ley Estatutaria de la JEP establece un tratamiento diferenciado para los crímenes de guerra establecidos en los ordenamientos de carácter internacional, dentro de los cuales se incluyen los delitos de violencia sexual. Si bien quienes voluntariamente se acogen a la JEP pueden ser titulares de penas alternativas, en el caso de los delitos de violencia sexual se prohíbe otorgar a sus perpetradores beneficios como la renuncia de la persecución penal de agentes del Estado (art. 45-46), así como la libertad transitoria, condicionada y anticipada (art. 52).

Del mismo modo, el estatuto de la JEP prevé que las víctimas que participen como intervinientes serán sujetas de medidas destinadas a garantizar su seguridad personal (art. 17), así como para la protección de sus derechos y garantías procesales, probatorias, sustanciales, al igual que al acceso efectivo al recurso judicial y los derechos que sean aplicables (art. 14), con el fin de conseguir su reparación integral.

La JEP establece principios de justicia restaurativa dirigidos a establecer el daño causado a las víctimas y su satisfacción desde sus necesidades y su dignidad por medio de la correspondiente reparación. (p. 144) Sin embargo, desde el punto de vista de la reparación y a partir de lo planteado como justicia restaurativa en el Acuerdo Final, resulta imposible una restauración satisfactoria de la situación anterior en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, pues tal como lo expresa la Corte Constitucional en su sentencia C-080 de 2018:

(...) los delitos perpetrados por actores armados en el marco del conflicto armado, y especialmente contra niñas, niños y adolescentes, presentan un bajo nivel de confesión por sus autores y son poco denunciados por sus víctimas, debido al temor a represalias por parte de los perpetradores, la estigmatización social y las barreras institucionales de acceso a la justicia. (Corte Constitucional, sentencia C-080 de 2018)

Sobre el componente de reparación integral, para los casos de violencia sexual el Acuerdo Final (2016) establece medidas de *Rehabilitación psico-social* que incluyen un

módulo de *‘Recuperación emocional a nivel individual’* acompañado de un *‘Plan de rehabilitación psico-social para la convivencia y la no repetición’*. Corresponde al Gobierno Nacional desarrollar estas estrategias mediante la ampliación de la cobertura pública a nivel territorial de los servicios de prestación de atención psico-social y servicios de salud mental cuando el proceso de recuperación de las víctimas lo amerite, con el fin de reconstruir el tejido social a mediano y largo plazo a partir del enfoque diferencial y de género. (p. 181-182)

Luego, en el componente de garantías de no repetición, el Acuerdo demanda un compromiso amplio y extenso por parte del Estado en cuanto a reformas que garanticen de manera general y eficaz el control y la no repetición en dos dimensiones. En primer lugar, la no repetición de las conductas de violencia sexual respecto de las víctimas; y en segundo, con el impedimento de una reanudación del conflicto armado interno. Al respecto el Acuerdo de Paz expresa que el cumplimiento de dichas garantías recaerá en:

(...) el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados. (...) atribución de responsabilidad y la imposición de sanciones por parte del Tribunal para la Paz de la JEP (...) reconocimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto y del esclarecimiento y rechazo de graves violaciones a los derechos humanos y de las graves infracciones al DIH, incluyendo aquellas que han sido históricamente menos visibles como las cometidas contra las mujeres, (...) la lucha contra la impunidad (...) [y] la promoción de la convivencia sobre la base de los reconocimientos de responsabilidad que se haga en el marco de la JEP. (p. 186-187)

A la luz de lo anterior, tanto el Acuerdo Final como el Estado colombiano acogen en sus declaraciones los lineamientos contemplados en los ya citados tratados internacionales en relación con la protección y defensa los derechos de reparación integral de las mujeres víctimas de violencia sexual. El compromiso además abarca a todos los actores del conflicto armado. Se reconoce que las violaciones e infracciones de derechos fueron cometidas tanto por miembros de las FARC-EP como también por los agentes estatales, para lo cual se establece, una vez se acojan a la JEP, un tratamiento diferencial para los integrantes de uno y otro lado (Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, 2018)

Para finalizar este análisis, a continuación se contrasta la idoneidad y congruencia de los referidos contenidos del Acuerdo Final con respecto de los mecanismos homólogos contemplados por la CorteIDH en una de sus sentencias sobre casos de violencia sexual en México, uno de los países del continente americano con mayor violencia contra de la mujer. (Meltis, 2020)

Los hechos ocurrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio de Texcoco y de San Salvador de Atenco en México, durante la represión de una manifestación de activistas y floristas que apoyaban el proceso social de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Durante el desarrollo de la protesta se adelantó un operativo policiaco que produjo la detención arbitraria de once mujeres, quienes manifiestan que fueron trasladadas a un Centro de Readaptación Social. Durante dicho trayecto y luego de su ingreso a dicho centro fueron sometidas a tratos denigrantes y violación sexual, tanto por parte de los miembros de la fuerza pública como por el personal médico que debía practicar los exámenes correspondientes para verificar las violaciones denunciadas por ellas. Ante estos acontecimientos y la ausencia de sanción de los agentes del Estado responsables de los mismos por parte de la justicia mexicana, las víctimas realizan petición ante la Comisión de la CorteIDH para que conozca y admita el caso.¹⁹

Si bien el tratamiento de protección y reparación de derechos de las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto colombiano no es directamente comparable con el referido caso mexicano, donde en rigor las condiciones de violencia sexual no corresponden a las características señaladas arriba para los contextos de conflicto armado, el análisis que sigue intenta destacar los elementos comunes relevantes que se pueden derivar de la congruencia existente entre los dos escenarios. Es decir, hace un balance del tratamiento aplicado, de una parte, por el estatuto de la JEP en relación con la sanción y reparación de delitos de violencia sexual que afectan a mujeres de la población civil en contextos de conflicto armado que dificultan el acceso a justicia y reparación integral, y de otra, por la

¹⁹ Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México. Véase más en: Forbes.com (2017, 16 de noviembre). Mujeres torturadas en Atenco llevan caso ante Corte Interamericana *Forbes México*. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/mujeres-torturadas-en-atenco-llevan-caso-ante-corte-interamericana/amp/>

CorteIDH sobre violencia sexual perpetrada por agentes el Estado y la denegación de justicia y reparación integral por este último a las víctimas.

Hay similitudes en los mecanismos de reparación de mujeres víctimas de violencia sexual contemplados Acuerdo de Paz implementado en Colombia y aquellos impuestos por la CorteIDH en su condena al Estado mexicano por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia. Ambos contemplan medidas de carácter de integral rehabilitación de la mujer, que incluyen de tratamiento de aspectos físico, médico y psicológico o psiquiátrico. (CorteIDH, 2018, p. 124)

Sin embargo, dentro de los mecanismos de reparación integral contemplados por el estatuto de la JEP, entre las medidas de reparación no se incluye la indemnización económica del daño causado, como sí sucede en la sentencia de la CorteIDH que impone al Estado mexicano. (p. 132). Surge el interrogante sobre las razones por las cuales no se contemplan este tipo de medidas en el diseño del SIVJSNR establecido por medio del Acuerdo Final, como instrumento para la reparación integral de los daños infligidos a las víctimas de violencia sexual.

La Corte Constitucional en la sentencia T-458 de 2010, precisa en el caso de las personas en situación de desplazamiento forzado el derecho a la reparación integral debe contemplar los daños de la víctima a nivel colectivo, así:

En el plano comunitario, también las víctimas colectivas de violaciones de sus derechos humanos o de delitos por parte de grupos armados al margen de la ley, tienen derecho a una reparación colectiva que exige por parte del Estado la implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. (Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2010)

Cabe indicar que la idoneidad de las medidas de reparación integral y no repetición apunta a la satisfacción de las víctimas en todos los aspectos relacionados con los daños ocasionados por la comisión del delito. En relación con los delitos sexuales, es preciso para la satisfacción de las víctimas asegurar el reconocimiento de responsabilidad por las omisiones del Estado (cuando sea el caso) o las acciones cometidas por sus agentes. Es decir,

las víctimas no solo necesitan que sea señalado su agresor, sino que el Estado del que son agentes, reconozca que les falló en lo que se refiere a la protección de sus derechos y garantice la implementación de las medidas que les aseguren un cambio y la no repetición de este tipo de hechos.

De lo anterior, habría que resaltar la medida de satisfacción propuesta por la CorteIDH (2018), toda vez que el reconocimiento de una medida indemnizatoria para las víctimas de violencia sexual opera también como el mecanismo de no repetición, en tanto requiere un esfuerzo mayor por parte del Estado y los victimarios en la valoración del daño causado y pago de una indemnización para la satisfacción de las víctimas de este delito en particular.

En la esfera individual de la mujer víctima de delito sexuales, eludir la reparación material por parte del Estado lleva a ignorar que su situación subordinada en el escenario social, en un entorno dominado por hombres en posiciones de poder, la cual continuará ejerciendo repercusiones económicas que contribuirán a reproducir las condiciones que facilitan y promueven patrones de violencia sexual en su contra en este tipo de contextos.

Para finalizar, cabe señalar que la aplicación de cada uno de los mecanismos de reparación previamente mencionados está condicionada a la implementación total del Acuerdo por parte del gobierno. Hasta el presente, tres años después del inicio de su implementación, esta situación se ha materializado de manera fragmentada debido a los obstáculos que se le han presentado.²⁰ Una de las consecuencias de ello es el rearme de miles de disidentes de las antiguas FARC-EP regresen a la lucha armada, debido a su percepción que el Gobierno está incumpliendo lo acordado en La Habana. (Casey, 2019)

A la luz de estos acontecimientos que representan una reactivación de las dinámicas de conflicto armado, los esfuerzos insuficientes del Estado frente al cumplimiento de los compromisos adoptados para la defensa, protección y garantía de la reparación de los derechos de las víctimas y la reincorporación de los excombatientes, así como los intentos de desarticular la justicia transicional y restaurativa como pilar de los principios de la JEP,

²⁰ Véase más en: Romero, M. (2019). Tres años después del acuerdo, Colombia sigue esperando la paz. *El orden mundial*. Recuperado de: <https://elordenmundial.com/tres-anos-despues-del-acuerdo-colombia-sigue-esperando-la-paz/>

supone una infracción de las obligaciones internacionales de Colombia particularmente en cuanto a impedir la repetición de la violencia sexual en zonas rurales apartadas contra las mujeres víctimas de violencia sexual, puesto que como ya se ha visto, los contextos de conflicto armado, facilitan, promueven y aumentan los patrones de violencia sexual en este tipo de ámbitos sociales.

Conclusiones

En el marco de más de cincuenta años de conflicto armado interno en Colombia entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se registraron sin número de conductas de violencia sexual perpetradas en contra de mujeres por parte de ambos actores armados del conflicto. Hoy se reconocen victimarios pertenecientes al grupo armado al margen de la ley, así como agentes estatales. Resaltando la afectación que sufren las mujeres a sus derechos a partir de esta clase de conductas punibles, también se precisa lo siguiente:

Las víctimas de violencia sexual han vivido en carne propia las vejaciones que se ejercen sobre sus cuerpos considerados disponibles, reducibles a objetos; esta violencia que permea todos los espacios sociales. En sus cuerpos están impresas las marcas de una sociedad que silencia a las víctimas, de un Estado incapaz de hacer justicia, de familias y comunidades tolerantes a las violencias de género y de un manto de señalamiento, vergüenza y culpa que impide que se reconozca la verdad sobre lo sucedido. (GMH, 2017, p. 11)

Para analizar el tratamiento de las violaciones masiva de derechos registradas en relación con este delito en el contexto del conflicto armado colombiano, este artículo revisa críticamente a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia y la normatividad nacional aplicable los mecanismos de protección y reparación de los derechos de las víctimas de la violencia sexual propuestos en el Acuerdo Final en su quinto punto que se enfoca en el tratamiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos. (Peña Gutiérrez, 2018)

Adicionalmente contrasta la congruencia de los mecanismos de reparación y de garantía de no repetición contemplados en el Acuerdo Final en relación a aquellos impuestos en una sentencia de la CorteIDH concerniente a casos de violencia sexual en contra de

mujeres por parte de agentes del Estado mexicano, teniendo en cuenta que muchas de las condiciones que facilitan y promueven patrones de violencia sexual contra las mujeres en ese contexto son semejantes a las observadas en un conflicto armado.

El resultado señala debilidades observadas en el Acuerdo Final, en particular en el sistema de justicia transicional y restaurativa implementado en el desarrollo del mismo. Si se parte del criterio de la satisfacción de las necesidades y expectativas de las víctimas como medida de la idoneidad de los mecanismos y medidas de reparación y no repetición contempladas en el Acuerdo Final, el presente artículo permite llegar a las siguientes conclusiones:

- La obligación internacional del Estado de prevenir la violencia sexual en los conflictos armados resulta extremadamente difícil de cumplir, en especial cuando se trata de conductas oportunistas por agentes armados frente a mujeres en situación de indefensión en escenarios geográficos alejados afectados por enfrentamientos bélicos entre las partes en conflicto.
- Los mecanismos contemplados por los ordenamientos jurídicos tanto internacionales como nacionales para la reparación de los derechos de las víctimas afectadas por esos delitos, y garantizar la no repetición también se ven limitados por numerosos obstáculos. En estas circunstancias, el poder desproporcionado del agente armado frente a la indefensión de la mujer en un contexto social en el que la discriminación de las mujeres está instalada en la cultura misma, genera en las víctimas un miedo difícil de remontar lo cual provoca que se guarde silencio e impide la detección de esta grave infracción y se fomenta su impunidad.
- El tratamiento de esta problemática en la que se registran afectaciones a nivel físico y psicológico de la víctima presenta desafíos mayores para su reparación integral, dado que cada caso es distinto como también lo son sus secuelas. De allí la dificultad de asegurar la idoneidad de los mecanismos y medidas de reparación previstas para satisfacer a las víctimas, particularmente en lo referido a las garantías de no repetición en contextos sociales y culturales que propician y fomentan la violencia sexual.
- Por consiguiente, es fundamental verificar la idoneidad de los mecanismos de reparación integral y no repetición previstos en relación con este delito, de tal manera

abarquen la totalidad de los daños y afectaciones ocasionados a las víctimas. De ello dependerá el cumplimiento o no de la obligación internacional del Estado de garantizar la satisfacción de las necesidades de las víctimas, luego de la falencia del mismo en la prevención de los delitos perpetrados contra ellas. La no inclusión de una indemnización compensatoria específicamente para las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado representa una limitación en las medidas prevista en el marco de justicia transicional contenidas en el Acuerdo Final, como lo permite apreciar el contraste con las medidas impuestas en la sentencia de la CorteIDH analizada aquí.

- La satisfacción de las víctimas de este delito con medidas de reparación integral resulta más exigente dado que, por una parte, no es posible restaurar las cosas a su estado inicial y por otra, los efectos de este tipo de violación perdurarán en el tiempo en los entornos sociales de arraigo de las mujeres afectadas.

- El compromiso de no repetición por parte de aquellos que se acogen a lo previsto en el Acuerdo Final es una medida importante en el caso de las mujeres afectadas por la violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Sin embargo, en la eventualidad que el conflicto armado se reanude, bien sea por parte de las disidencias de las FARC-EP (Verdad Abierta, 2019), o por parte de otros grupos armados organizados al margen de la ley, tal medida no garantiza la no repetición especialmente para las mujeres arraigadas en escenarios geográficos y sociales en zonas rurales y alejadas en donde su vulnerabilidad se incrementa en relación con este tipo de violencia.

- Del mismo modo, lo referente a la reparación y no repetición no se puede atribuir únicamente a los compromisos adoptados por los victimarios como se prevé en el Acuerdo Final. El Estado también tiene la obligación de reparar a las víctimas, más allá de establecer judicialmente los culpables de la comisión de este tipo de delitos. De allí la importancia de la medida de la indemnización compensatoria de las víctimas afectadas por este delito como forma de reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el abandono de esta población y la desprotección de sus derechos. Adicionalmente, representaría una contribución significativa para aliviar la situación de subordinación de la mujer en entornos sociales dominados por hombres en posiciones de poder, aportando así a modificar en alguna medida las condiciones que facilitan y promueven patrones de violencia sexual en su contra en este tipo de contextos.

- Por último debe tenerse en cuenta que todas las acciones u omisiones cometidas por el Estado que puedan ser consideradas como inobservancias del Acuerdo Final, tales como los incumplimientos en la oportuna y debida reincorporación de los excombatientes, entre otros (Verdad Abierta, 2019), representan brechas en el cumplimiento obligaciones internacionales del Estado colombiano por cuanto redundan sobre la efectiva la reparación integral y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país.

Referencias Bibliográficas

- ABColombia, Sisma Mujer (2013). Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y el Proceso de Paz. Recuperado de: <https://www.abcolombia.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/4-Sexual-Violence-Spanish.pdf>
- Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016). Recuperado de: <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/nuevoaduerdofinal.pdf>
- Albarrán, A. J. (2003). Psicología forense y victimología. En Urra, J. (2003). *Tratado de psicología forense*. España: Editorial Siglo XXI.
- Álvarez Molinero, N. (2007). Aportaciones del feminismo al Derecho Internacional en la construcción de la paz. *Revistas-Feminismo/s. Género, Conflicto y Construcción de la Paz*. (9). pp. 79-91.
- Barrios, M. A. & Rojas Mateus, N. (2015). El rol de la mujer en el conflicto armado colombiano. (Tesis de Maestría). Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C. Recuperado de: <https://librepensador.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/5/2015/10/El-rol-de-la-mujer-en-el-conflicto-armado-colombiano-Maestr%C3%ADa-en-gobierno-y-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-El-Libre-Pensador.pdf>

- Beristein, A. (1994). *Nueva criminología desde el Derecho Penal a la victimología*. España: Editorial Tirant Lo Blanch.
- Bohórquez Suárez, A. M. (2018). Actualidad de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto en Colombia: marco normativo nacional e internacional. (Trabajo de Grado). Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.
- Burbano Fernández de Castro, N. & García Otero, R. (2016). La reparación de víctimas y conflictos armados: experiencias internacionales. *Revista Inciso*, 18 (2), pp. 57-67. Recuperado de: https://revistas.ugca.edu.co/index_php/inciso/article/view/467/993
- Casey, N. (2019). Las fallas que ponen en riesgo el acuerdo de paz en Colombia. *The New York Times*. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2019/05/17/espanol/america-latina/colombia-paz-farc-duque.html>
- Castillo Moro, M. (2017). *Miedo, control social y política criminal. Una visión multidisciplinar de la seguridad, derechos y libertades*. Madrid, España: Editorial Dykinson, S.L.
- Castrillón Pulido, G. Y. (2015). ¿Víctimas o victimarias? El rol de las mujeres en las FARC. Una aproximación desde la teoría de género. *Revista Opera*. (16), pp. 77-95. Doi: 10.18601/16578651.n16.06
- Comité Internacional de la Cruz Roja (1949). *IV Convenio de Ginebra: relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra*. Ginebra, Suiza: CICR. Recuperado de: <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf>
- Comité Internacional de la Cruz Roja (1977). *II Protocolo Adicional: relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional*. Ginebra, Suiza: CICR. Recuperado de: <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm>
- Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. (1992) *Recomendación general N° 19. Sobre la violencia contra la mujer*. Recuperado de:

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf

Congreso de Colombia (2011). Ley 1448 de 2011. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Recuperado de:

<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf>

Congreso de Colombia (2017). Acto legislativo 01- 04 de abril de 2017. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Jurisdicción Especial para la Paz. Recuperado de: <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/actolegislativondeg01de4deabrilde2017.pdf>

Congreso de Colombia (2019). Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. [Ley Estatutaria 1957 de 2019]. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia. Jurisdicción Especial para la Paz. Recuperado de: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1957_2019_pr003.html#158

Constitución Política de Colombia [Const.] (1991). Recuperado de: <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf>

Corte Constitucional (15 de junio de 2010). Sentencia T-458 de 2010. [M. P. Luis Ernesto Vargas Silva].

Corte Constitucional (13 de febrero de 2017). Sentencia T-083 de 2017. [M. P. Alejandro Linares Cantillo].

Corte Constitucional (15 de agosto de 2018). Sentencia C-080 de 2018. [M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo].

Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH (31 de enero de 2006). *Caso masacre de Pueblo Bello vs. Colombia*. Recuperado de: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_140_esp.pdf

- Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH (31 de agosto de 2010). *Caso Rosendo Cantú vs. México*. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf
- Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH (28 de noviembre de 2018). *Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México*. Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
- Daza Coronado, S. M. (2016). *Mujer, familia y sociedad*. Bogotá D.C., Colombia. Universidad Católica de Colombia.
- Eltiempo.com. (2018, 29 de octubre). Los diez departamentos más golpeados por el conflicto en 60 años *Eltiempo.com* Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cuales-son-lo.s-departamentos-mas-afectados-por-el-conflicto-armado-en-colombia-286030>
- Facchi, A. (2005). El pensamiento feminista sobre el Derecho. Un recorrido desde Carol Gilligan a Tove Stang Dhal. *Revista Academia*. (6), pp. 27-47.
- Forbes.com. (2017, 16 de noviembre). Mujeres torturadas en Atenco llevan caso ante Corte Interamericana. *Forbes México*. Recuperado de: <https://www.forbes.com.mx/mujeres-torturadas-en-atenco-llevan-caso-ante-corte-interamericana/amp/>
- Gallegos Argüello, M. del C. (2012). La identidad de género: masculino versus femenino en Suárez Villegas, J. C., Liberia Vayá, I. & Zurbano Berenguer, B. (coord.), *I Congreso Internacional de Comunicación y Género*. Libro de Actas (pp. 705-718). Sevilla, España. Universidad de Sevilla. Facultad de comunicación.
- García Cadena, M. (2018). Salvamento de voto a la Resolución N° 000973 del 31 de julio de 2018. Bogotá D.C.: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Jurisdicción Especial para la Paz. Recuperado de: https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/3/9/SV_Dr-Mauricio-Garcia_Resoluci%C3%B3n_SDSJ-0973_31-julio-2018.pdf

- Grupo de Memoria Histórica [GMH] (2011). *Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano*. Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá D.C., Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica: Editorial Taurus. Recuperado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf
- Grupo de Memoria Histórica [GMH] (2013) *¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Informe General Grupo de Memoria Histórica. Bogotá D.C., Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuperado de: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-a-ya-memorias-guerra-dignidad-new-9-agosto.pdf>
- Grupo de Memoria Histórica [GMH] (2017). *La guerra inscrita en el cuerpo*. Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado. Bogotá D.C., Colombia: GMH. Recuperado de: www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes_accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf
- Grupo de Monitoreo para la Implementación de la CEDAW en Colombia. (2019). *Mujeres y Paz, en búsqueda de plenos de derechos*. Informe Sombra del Grupo de Monitoreo para la Implementación de la CEDAW en Colombia. Bogotá D.C., Colombia. Recuperado de: https://www.worldvision.co/media/publicaciones/None/Informe_sombra_MUJERES_Y_PAZ_EN_COLOMBIA_EN_BUSQUEDA_DE_PLENOS_DERECHOS.pdf
- Gutiérrez de Piñeres Botero, C., Coronel, E. & Pérez, C. A. (2009). Revisión teórica del concepto de victimización secundaria. *Revista Liberabit*, 15 (1), pp. 49-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272009000100006&lng=es&tlng=es
- Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo-ILSA (2012). *El derecho a la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado en*

- Colombia. Bogotá D.C., Colombia: Gente Nueva Editorial. Recuperado de: <https://prensarural.org/spip/IMG/pdf/5-completo.pdf>
- Jara Bustos, F. (2013). Fiscalía v. Lubanga Dyilo: La primera sentencia sobre reparaciones de la Corte Penal Internacional. *Anuario de Derechos Humanos* (9), pp. 113-125. Recuperado de: <http://www.anuariodh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/27037/28635>
- Jurisdicción Especial para la Paz, Salas de Justicia, Sala de Amnistía o Indulto (08 de abril de 2019). Radicación: 20181510212642,20181510120712. [M.P. Xiomara Cecilia Balanta Moreno)
- Loyo Cabezudo, J (2017). La justicia transicional en Colombia: ¿Un instrumento creado para erradicar la impunidad? *Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal-ANIDIP*. (5), pp.32-61. Doi: 10.1284/revistas.urosario.edu.co/anidip/a.5669
- Meltis, M. (2020). ¿Cómo frenar la violencia contra las mujeres en México? *The New York Times*. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2020/02/24/espanol/opinion/mujeres-mexico.html>
- Miguel, J. C. (2014). Pandataria: una mirada feminista al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional de las personas refugiadas. (Tesis de Doctorado). Universidad de Valencia, Valencia, España.
- Montada, L. (1991). Coping with life stress: Injustice and the question “Who is responsible?” In Steensma, H. & Vermunt, R. (eds.) *Social justice in human relations*. (2), Plenum, New York, pp. 9-30.
- OEA (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica. San José, Costa Rica. Recuperado de: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0001.pdf>
- OEA (1995). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. “Convención Belém do Pará”. Belém do Pará, Brasil. Recuperado de: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

- ONU Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>
- ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Recuperado de: [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)
- ONU (2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>
- ONU (2006). Resolución 60/147 de 2006. Recuperado de <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/45/PDF/N0549645.pdf?OpenElement>
- Peña, A. (2006). Así reclutan las FARC. *Revista Semana*. Recuperado de: <https://www.semana.com/on-line/articulo/asi-reclutan-farc/79954-3>
- Peña Gutiérrez, D. L. (2018). Justicia transicional y reparación integral de víctimas en Colombia: El caso de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Soacha. (Artículo de Investigación). Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.
- Ramírez Huertas, G. (2017). *Una mirada a los derechos humanos desde la perspectiva de género en los derechos humanos a debate. Perspectivas desde el derecho internacional* (pp. 137-141), Bogotá D.C., Colombia: Universidad Católica de Colombia.
- Romero, M. (2019). Tres años después del acuerdo, Colombia sigue esperando la paz. *El orden mundial*. Recuperado de: <https://elordenmundial.com/tres-anos-despues-del-acuerdo-colombia-sigue-esperando-la-paz/>
- Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (2018). Resolución N° 000973. Bogotá D.C., Colombia: Jurisdicción Especial para la Paz.

- Sciortino, M. S. (2009). El feminismo latinoamericano como agente regional en el diálogo internacional sobre los derechos humanos en Cotidiano Mujer-Articulación Femenina Mercosur (Ed.), *Desafíos feministas en América Latina: la mirada de los jóvenes* (pp. 41-53), Montevideo, Uruguay. Recuperado de: http://www.cotidianomujer.org.uy/2009/cotidiano45_p30.pdf
- Scott, J. W. (1996). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En Lamas, M. *El género; la construcción cultural a la diferencia sexual* (pp. 265-302). México: PUEG.
- Váldez Correa, B. (2019). Víctimas de violencia sexual de las FARC piden que sus casos los lleve la JEP. *El Espectador*. Recuperado de: <https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/victimas-de-violencia-sexual-de-las-farc-piden-que-sus-casos-los-lleve-la-jep-articulo-857791>
- Valencia, O. L. & Daza, M. F. (2010). Vinculación a grupos armados: un resultado del conflicto armado en Colombia. *Revista Diversitas-Perspectivas en Psicología*, 6 (2), pp. 429-439. Doi: 10.15332/s1794-9998.2010.0002.14
- Vargas Rincón, A. (2008). Una mirada a la agrupación originalmente revolucionaria que se transformó en terrorista. *Revista Criminalidad*, 50 (1), pp. 403-416. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082008000100014&lng=en&tlng=es
- Verdadabierta.com. (2019, 30 de agosto). Acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, garantía para excombatientes *Verdadabierta.com* Recuperado de: <https://verdadabierta.com/acelerar-implementacion-del-acuerdo-de-paz-garantia-para-excombatientes/>
- Vivas Barrera, T. G. (2015). Eficacia de las órdenes de la Corte Interamericana sobre la reparación de la violación de derechos humanos. En Chacón Triana, N., Cubides Cárdenas, J. A., Díaz Mantilla, L. F., Martínez Lazcano, A. J., Vargas Díaz, D. R. & Vivas Barrera, T. G., *Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos* (pp. 9-33), Bogotá D.C., Colombia: Universidad Católica de Colombia.

Wood, E. J. (2016). La violencia sexual asociada al conflicto y las implicaciones políticas de investigaciones recientes. *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, 18 (2), pp. 13-46.